

El monstruo bueno

12

En el año de 1999, Jaime Garzón parecía un intocable, lo mismo que García Márquez y Antonio Caballero. Gabo había dejado hacía tiempo la indumentaria de contestatario. Aunque no renegaba de su amistad con Castro, se relacionaba con gente como Kissinger, Rockefeller y algunos ex presidentes colombianos, incluido Julio César Turbay, que había llevado a cabo la represión que empujó al mismo Gabo al exilio en 1979. *Cambio 16*, revista de la que se había convertido hacía poco en socio mayoritario, no se parecía en absoluto a la valiente revista *Alternativa*, con la que colaboraba en aquella época. En todo caso, cuando se movía por Bogotá o dentro de las murallas de la vieja Cartagena, donde vivía en una especie de fortín de color rojo pompeyano frente al mar Caribe, García Márquez iba siempre acompañado por la escolta.

Antonio Caballero era el periodista más famoso de Colombia. El país que conserva el récord mundial de periodistas asesinados, parecía perdonarle su audacia de escribir lo que los colombianos apenas se atrevían a susurrar dentro de las paredes de su casa. Incluso en la época más sanguinaria de los carteles mafiosos, Caballero continuó repitiendo, por ejemplo, que no existía en el país una organización más turbia y criminal que el Estado. A diferencia de Gabo, le gustaba provocar a los poderosos de todo tipo. Y no sólo escribiendo. En 1995 participó en una de las conferencias organizadas en el Teatro Patria de la Escuela Superior de Guerra. A un oficial que le pedía su opinión sobre la propuesta de reintroducir en el país la pena de muerte, respondió Caballero dirigiéndose a la platea, llena

de generales y coroneles: “Lo que haría falta es eliminarla, dado que la están aplicando cada día”. A pesar de recibir a menudo amenazas de muerte, rehusaba la escolta militar. Hubiera supuesto una contradicción con lo que escribía. Solamente le tranquilizaba la llamada amnesia colombiana. “Me ha bastado salir del país un par de meses para olvidarse de mí quien me había amenazado”. En todo caso, y para tampoco desafiar demasiado al destino, desde finales de los ochenta Caballero pasaba gran parte de su vida en Madrid, donde le gustaba escribir sobre las corridas.

Jaime Garzón era seguramente más popular en Colombia que Antonio Caballero, y más querido que el mismo García Márquez. Cada domingo hacía reír a millones de espectadores de televisión con sus fantásticas caricaturas –un portero, una camarera, un limpiabotas o la cocinera del palacio presidencial– que se burlaban con dureza de los poderosos.¹ En la universidad fue uno de los fundadores del Movimiento Rotundo Vagabundo, cuyo único propósito era convencer a la gente para “no hacer absolutamente nada”. No era un tipo atado a una ideología. Aunque era de izquierda, organizó en 1986 las elecciones del candidato conservador Andrés Pastrana quien, una vez elegido alcalde, lo nombró, para pagar su deuda, alcalde de San Juan de Sumapaz, una aldea de la cordillera dominada por las FARC. Cuando el líder guerrillero Tirofijo lo supo, indicó a los suyos que le trajeran a “aquel tipo tan raro”, para conocerlo. No fue, sin embargo, la cordial conversación con el jefe de los rebeldes la que quemó su carrera, sino la pintoresca y dura respuesta (“Aquí sólo están las putas FARC”) que dio a la pregunta de la secretaria municipal de Bogotá, interesada en saber si en San Juan existían “casas de lenocinio”. La inmediata destitución obligó a Jaime a renunciar a los sueños de carrera política y a intentar la de cómico. Después de años de éxitos cada vez más amplios en la televisión, no se contentó con hacer reír a los colombianos de sus propias tragedias sino que se puso a ayudarles, concretamente, como sólo podía hacerlo un personaje de su tipo. Empezó casualmente, convenciendo a los comandantes guerrilleros de la región de Sumapaz de que liberasen a un conocido suyo, que había sido secuestrado. Desde entonces no acertó ya a negar su ayuda a otras familias que sufrían el mismo drama. Garzón hacía todo a la luz del día, de manera desinteresada y con el permiso de la Oficina Antisecuestro de la Presidencia de la República. Pero su actividad de mediador no agradaba a los militares, que preferían la organización de

1. Sobre la historia de Garzón, véase *Cambio 16*, 31 de agosto de 1998; *Semana*, 23 de agosto de 1999; *El Tiempo*, 8 de julio y 6 de agosto de 2000; *El Colombiano*, 13 de marzo de 2002; *El Espectador*, 13 de diciembre de 2003.

operaciones de rescate arriesgadas y a veces insensatas. Jaime Garzón comenzó a recibir llamadas telefónicas de amenaza. En mayo de 1999, durante un coctel al que asistían diferentes personalidades, entre ellas el embajador de Estados Unidos, reveló que el comandante del ejército, Jorge Enrique Mora, le estaba acusando de ser “un colaborador de las FARC”. Sintiendo en peligro, visitó a finales de julio, en la supercárcel La Modelo de Bogotá, a un comandante paramilitar para establecer un contacto con el mayor distribuidor de muerte del país, Carlos Castaño. Todo fue inútil.

Unos días más tarde, el 13 de agosto de 1999, a las seis de la mañana, un sicario en motocicleta se colocó a su altura en un semáforo, cerca de la sede de Radionet, una cadena radial en la que colaboraba hacía tiempo, y le propinó varios disparos con una P38. A pesar de encontrarse herido, Garzón consiguió apretar el acelerador de su Cherokee beige, hasta chocar contra un poste de electricidad, a unos cincuenta metros. Garzón tenía 37 años. “Es como si hubieran matado al miembro más ingenioso y alegre de cada familia”, dijeron en la radio. La oleada emotiva originada por su homicidio recordó la que había tenido lugar tras el fatídico 9 de abril de 1948. La muerte de Garzón no desató ninguna revuelta, sino una amplia consternación. Cuando diversos políticos, protegidos por policías, trataron de acercarse al féretro durante el funeral, celebrado ante medio millón de personas, se levantó un vocerío de la multitud gritándoles a coro “ifariseos, fariseos!”

Los periódicos transformaron el habitual “¿quién ha sido?”, por el más apropiado de “¿quién ha podido hacer una cosa semejante?” Unas horas después del homicidio, Castaño negó ser el responsable. El ejército, por el contrario, rompió su silencio cuando Francisco Santos, jefe redactor de *El Tiempo* escribió: “En este caso no hay duda. A Jaime Garzón lo mató la extrema derecha militar”.² Las jefaturas del ejército, la aviación y la marina pidieron en un comunicado conjunto, a dicho periódico, el más cercano al gobierno del país, que aportara las pruebas de una acusación “tan infamante”.

El gobierno creó una megacomisión de investigación, compuesta por ejército, Policía, DAS, Procuraduría General y Fiscalía. En marzo de 2002 se emitió una orden de captura contra dos presuntos matones y Carlos Castaño, quien sería condenado a 38 años de prisión como autor intelectual del homicidio. En diciembre de 2003 la Procuraduría General acusó a la Fiscalía y al DAS de haber manipulado las indagaciones. Varios sicarios

2. *El Tiempo*, 15 de agosto 1999.

de la banda La Terraza refirieron que habían recibido por aquella muerte 39 millones de pesos del jefe de las AUC, con la intención de hacer “un favorcito” al general Mora, como había sucedido en el pasado con la muerte, entre otros, del abogado Eduardo Umaña o del matrimonio de Elsa Alvarado y Mario Calderón.³ Probablemente los estrategas de la guerra sucia estaban asignando a Castaño el papel desempeñado durante años por Pablo Escobar. Pero había una diferencia esencial. Mientras don Pablo había sido el “monstruo bueno para todos los crímenes”, a Castaño se lo mostraba cada vez más como el “monstruo bueno y basta”.

Los grandes grupos informativos colombianos, que habían negado o minimizado su existencia durante años, comenzaron de pronto a ocuparse del fenómeno paramilitar, procurando negar su origen institucional y presentándolo como una respuesta natural, ilegal pero comprensible, a la violencia guerrillera. El canal de televisión de la poderosa Radio Cadena Nacional (RCN) transmitió una entrevista a Rambo, realizada por la periodista más *in* del momento, dentro de un clima de amable charla entre dos amigos de la buena sociedad.⁴ “Debemos dar la palabra a todos los contendientes”, se justificó el director de RCN. La simpatía hacia los paras tampoco se camuflaba mucho. En noviembre de 2000, la cadena Caracol sostuvo que más del 80% de los colombianos era favorable a la creación, por parte del Estado, de grupos armados civiles. Unos días más tarde se descubrió que en la encuesta virtual sobre el tema habían sido consultadas un total de 23 personas.⁵

El juego de la legitimación de Castaño estaba bien articulado. Mientras le concedían entrevistas fáciles, que Rambo utilizaba para mezclar reivindicaciones de masacres con actos de contrición por “eventuales excesos cometidos”, los *mass media* fingían estar preocupados por la presunta simpatía de la opinión pública colombiana hacia las AUC. Los políticos y militares tampoco ahorraban banalidades y lugares comunes. Pastrana afirmó, por ejemplo, que “no hay mayor equivocación que pensar que se puede llegar al cielo apoyándose en la espalda del diablo”. El cielo era en dicho supuesto “un país sin guerrilla” y el diablo era Castaño. El ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, declaró solemnemente que “la violencia no se derrota con matanzas”. Para el comandante de las Fuerzas Armadas, Fernando Tapias, por su parte, “los grupos de justicia privada y

3. *Semana*, 20 de diciembre de 2000; *El Tiempo*, 10 marzo de 2004.

4. La entrevista en RCN de Castaño es del 10 de abril de 2001.

5. El sondeo es del 24 de noviembre de 2000.

las 'autodefensas' se expanden porque el Estado es débil". Pastrana estaba de acuerdo ya que afirmó: "Hay quienes en el concierto internacional, pretenden que Colombia luche contra el narcotráfico y controle a los grupos de autodefensa y otras manifestaciones de delincuencia pero, al mismo tiempo, critican cualquier acción destinada a fortalecer el ejército y la policía". Tanto Tapias como Pastrana se cuidaban muy bien de recordar que, en el pasado, toda medida de aquel género no lograba sino aumentar la presencia paramilitar. Y si alguien se lo recordaba, reaccionaban indignados, como hizo un general de división que acusó a Human Rights Watch de conspirar con los narcotraficantes para difamar al ejército.

Como una prueba más de su voluntad de combatir a los paras, el Estado podía hacer ostentación de decretos, discursos y promesas, pero ningún hecho concreto. Tuvo una excelente ocasión para demostrar lo contrario en abril de 2001, cuando el ejército apresó a unos 70 paras que, en los días anteriores, habían masacrado a 50 indígenas de la zona del Alto Naya, al sur de Cali.⁶ Los periódicos definieron la operación militar como "la prueba de que la lucha contra el paramilitarismo se hace por convicción y no por la imposición de la comunidad internacional". En realidad, el comportamiento del Estado no fue tan transparente. La masacre del Alto Naya había sido perfectamente anunciada: en diciembre pasado Castaño había acusado a los habitantes de la región de proteger a los guerrilleros del ELN, que habían secuestrado a un nutrido grupo de personas en Cali. A continuación de aquel secuestro, que suscitó gran conmoción, el ejército había comenzado una operación de rescate, que detuvo Pastrana porque la juzgaba muy arriesgada. La intervención del presidente fue criticada duramente por la jefatura militar. El comandante de la brigada local, general Jaime Canal, formado en la School of America de Panamá, dimitió mostrando su disgusto por "no haber podido matar a ningún bandido".

Enviando sus comandos a la zona, Castaño quiso de nuevo vengar la afrenta sufrida por las Fuerzas Armadas. Sólo al cabo de varios días de comenzar la matanza fueron enviados a la zona 400 militares. Pero más que capturar a los paras, los salvaron de los guerrilleros, ya que les habían cortado toda vía de fuga y se preparaban para exterminarlos. El carácter excepcional de aquel episodio obligó a Pastrana y al general Mora a volar hasta Buenaventura, la ciudad más cercana al Alto Naya, donde declararon: "Nadie puede llamarse a engaño. Nuestras Fuerzas Armadas

6. El relato sobre la masacre en Alto Naya y las declaraciones posteriores son de *El Tiempo*, 18 de abril de 2001; *El Colombiano*, 4 de mayo de 2001; *Semana*, 9 de mayo de 2001.

combaten por igual a todos los enemigos del Estado, sean de izquierdas o de derechas". Mientras ambos charlaban con los periodistas convocados en la ciudad portuaria del Pacífico, los soldados de los batallones de contraguerrilla luchaban en los montes del Alto Naya contra los grupos del ELN y de las FARC, y los voluntarios de la Cruz Roja metían en sacos de plástico los restos de los cadáveres recuperados. "Si las autoridades encuentran un solo cadáver cercenado en el Naya con motosierra, yo me entrego ahí mismo", juró en esa ocasión Carlos Castaño. Un general, enviado al lugar de la matanza trató de explicar al enviado de *El Espectador* la ferocidad de los hombres de las AUC: "Yo creo que –y perdónenme acá– el orgasmo de esas personas es cuando asesinan... Sería bueno volver a la niñez de esas personas y saber si conocieron a sus padres, si saben qué es tener una madre, qué es tener el calor de un hogar".

Lo sucedido se repetía cada día, si bien en proporciones menores, en diferentes regiones del país. Una y otra vez los militares llegaban cuando había concluido la masacre, incluso cuando las AUC anunciaban anticipadamente sus proyectos, y las poblaciones amenazadas lanzaban llamadas desesperadas de socorro. En mayo de 1998 había tenido lugar una matanza en Puerto Alvira, una pequeña ciudad a 66 kilómetros de Mapiroipán. Los habitantes enviaron inútilmente, a lo largo de semanas, hasta 45 cartas pidiendo auxilio a ministros, generales del ejército y de la Policía, gobernadores y alcaldes. Hasta la Aeronáutica Civil había sido advertida por las mismas AUC, vía fax: "Piloto, técnico o controlador aéreo que efectúe o autorice aterrizajes será declarado objetivo militar". Ninguna autoridad, sin embargo, se movió para impedir que los paras mataran a 23 presuntos "colaboradores de la guerrilla", entre quienes había una niña de 5 años.⁷ Las solicitudes de ayuda caían asimismo en el vacío cuando procedían de organismos prestigiosos, como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que en julio de 1999 indicó que los paras iban a invadir la zona de La Gabarra, en la frontera con Venezuela. El comandante de la brigada que operaba en la zona dijo que la amenaza de las AUC era "una quimera y en la actualidad un imposible de cumplir pues las tropas del Batallón 46 asumieron el control de la localidad". Entre el 20 y el 22 de agosto, 200 paras mataron sin impedimento alguno a unos 40 campesinos.⁸

7. *El Espectador* y *El Colombiano*, 7 de mayo de 1998 y *Semana*, 11 de mayo de 1998.

8. *Semana*, 15 de mayo de 2000.

Las autoridades militares inventaban una excusa diferente según la ocasión para justificar su ausencia. La más habitual era la falta de personal, como había sucedido en el caso de Mapiripán. El comandante de la brigada que operaba en la región explicó la falta de intervención en Puerto Alvira, recordando que los habitantes de la zona habían manifestado unos meses antes el deseo de que todos los contendientes –paramilitares, guerrilleros y militares– se mantuvieran lejos de la ciudad. En el caso de Alto Naya, un coronel afirmó que el retraso en prestar ayuda se había debido a los fuertes temporales. De todas maneras la complicidad del ejército con las AUC continuaba siendo evidente, al margen de los compromisos oficiales.

El politólogo Eduardo Pizarro explicó en *Semana* las diversas tendencias existentes dentro del Estado en relación con los paramilitares.

En primer término, los sectores que les han brindado todo su apoyo e, incluso, que las han incorporado plenamente en el dispositivo de contrainsurgencia de las Fuerzas Armadas. Es imposible saber si esta política ha gozado de un respaldo de la cúpula militar. Sin embargo, sería intentar cubrir el sol con las manos negar el apoyo del que han gozado estos grupos por parte de múltiples oficiales, brigadas y batallones en distintas regiones del país. En segundo término, los sectores que consideran a estos grupos como un mal necesario, debido a los pobres resultados de las Fuerzas Militares. Si bien se oponen a que se les brinde un apoyo, tampoco consideran conveniente desmontar a los únicos grupos que han logrado paralizar el avance de la guerrilla en algunas áreas del país. En tercer término, los sectores del Estado que piensan que estos grupos deben ser combatidos por la fuerza pública sin contemplaciones, debido a su carácter abiertamente criminal. Finalmente, encontramos a quienes consideran que estos grupos deben ser reconocidos como parte del conflicto; es decir, como actores políticos... A nuestro modo de ver, la actitud mayoritaria en el seno del Estado es la segunda, o sea la de la convivencia pragmática... que podría ser 'ni se les apoya ni se les combate'.⁹

En 1988, Antonio Caballero había aprovechado la columna semanal que llevaba su firma en *El Espectador* para publicar un listado de las 65 masacres llevadas a cabo durante el año en curso, de las que 58 habían sido realizadas por paramilitares. Al concluir la lista que incluía

⁹. Cambio, 26 de enero de 1998.

lugar, fecha y número de víctimas de cada matanza, Caballero añadía amargamente: “No se qué lecciones se pueden sacar de todo esto. Tal vez alguna lección de geografía”. Trece años más tarde, Caballero hubiera tenido que disponer de una página entera del diario para colocar la lista entera de las casi 400 matanzas cometidas en 2001. Desde los años ochenta no solamente había cambiado la cantidad sino también la calidad de los estragos. Al principio, se atribuían casi todos a las llamadas “fuerzas oscuras”. Desde finales de los noventa fueron reivindicados como episodios normales de guerra y considerados como tales por el poder y la gran prensa, lo que era todavía más significativo. Cuando los políticos y los politólogos reconocían a los paras “una capacidad demostrada de contención de la guerrilla” no podían sino referirse a su actividad militar principal, sino única, que consistía en eliminar civiles inermes, dado que las AUC continuaba dejando al ejército la tarea de combatir a la guerrilla. Como recompensa por el trabajo desarrollado, Castaño empezó a exigir cada vez más abiertamente el reconocimiento político de su movimiento. Los representantes del Estado le respondían de manera contradictoria, a veces incluso grotesca. Cuando se encontraban con Rambo, se justificaban aduciendo “razones humanitarias” o lo hacían a escondidas, para mantener la farsa de su presunta clandestinidad. Era una comedia indecorosa para un gobierno que aspiraba a ser respetable, aunque nadie parecía avergonzarse de ello en Bogotá.

En 1998 comenzaron a ser más insistentes las iniciativas de Castaño para conseguir un estatus idéntico al asignado a la guerrilla. En julio se reunió hasta con 11 representantes de la llamada “sociedad civil”, a quienes prometió respetar las diferentes organizaciones, llegando a firmar el denominado “acuerdo del Nudo de Paramillo”, que demostró ser una burla, vistas las cientos de masacres que continuó ordenando a sus hombres. En noviembre de 2000, Castaño intentó una jugada más arriesgada: organizó el secuestro de siete diputados en la región de Córdoba. Más que un acto de violencia fue una mezcla de vacaciones y seminario al aire libre entre amigos, que compartían parecidas opiniones sobre la realidad del país.¹⁰ La farsa terminó cuando Pastrana aceptó el envío de una delegación encabezada por el ministro del Interior para escuchar las lamentaciones del líder paramilitar acerca de las conversaciones de paz en el Caguán, y sobre todo en torno a la propuesta de ley que debería permitir el canje de soldados prisioneros de las FARC por guerrilleros detenidos en las cárceles colombianas. Rambo se hizo entonces portavoz de los militares, que con-

¹⁰. *El Tiempo*, 18 de noviembre de 2000, y *Semana*, 6 de noviembre de 2000.

sideraban una afrenta cualquier hipótesis semejante. Castaño era consciente de la importancia cada vez mayor de su papel. “El ejército no tiene las fuerzas suficientes para combatirnos a nosotros y a la guerrilla al mismo tiempo, y es obvio que dé prioridad en su lucha a quienes atacan al Estado”. Desde el comienzo de la negociación con las FARC temía ser traicionado por sus protectores institucionales. Sospechaba sobre todo de Pastrana. “Ha utilizado las AUC cada vez que ha querido, como si fuéramos un Rod Weiler del Palacio Nariño, lo saca para asustar y lo vuelve a encerrar simbólicamente” (Castaño, 2002), afirmó en su hagiografía. También lo pensaban y se lo deseaban sus enemigos. Un comandante guerrillero del ELN afirmó en la revista *Futuro* que “Carlos Castaño va a terminar como Pablo Escobar o como El Mexicano... muerto o en la cárcel, o de pronto como Noriega, allá, zampado en una cárcel de los Estados Unidos”.

Los temores de Rambo parecieron concretarse en mayo de 2001, cuando un grupo de jueces de la Fiscalía, apoyados por 200 militares de las Fuerzas Especiales del ejército, desembarcaron en Montería, capital del departamento de Córdoba, para atacar la red de financiación de las AUC.¹¹ La primera en ser registrada fue la sede de la fundación Funpazcor, alojada en un edificio frente al cuartel de la policía. Durante la operación los jueces encontraron pruebas de que la fundación era utilizada para vehiculizar las contribuciones de cientos de empresarios y latifundistas de la región al ejército de los paras. Los jueces descubrieron asimismo que la cuñada de Rambo había recuperado casi enteramente las 12.000 hectáreas distribuidas con gran bombo, al comienzo de los noventa, a los ex guerrilleros del EPL.¹² Las indagaciones en las casas de los mayores propietarios de la ciudad desataron reacciones furibundas. Jorge Visbal Martelo, presidente de Fedegan, manifestó que la acción policial era irresponsable y bellaca. “Ojalá que esta actitud de estar persiguiendo a gente honorable del país la siguieran y desarrollaran, por ejemplo, en el Caguán y fueran a capturar a los bandidos de las FARC”. Rodrigo García, un poderoso ganadero de la zona, que había propuesto levantar una estatua a Castaño en la plaza principal de Montería, se defendió con uñas y dientes. “Quieren castigarnos por la gratitud y la simpatía que podemos tener con él”. El gobernador de Córdoba habló de “insulto a la región entera”, y convocó una marcha de protesta, a la que se adhirieron los comerciantes y todas las empresas de servicios.

11. *El Tiempo*, 31 de mayo de 2001; *El Colombiano*, 7 de junio de 2001.

12. *El Tiempo*, 1º de junio de 2001.

Los únicos que permanecieron en silencio, claramente desacreditados por la operación realizada a espaldas suyas, fueron los destacamentos locales del ejército y de la policía, convertidos desde hacía años en el cordón de seguridad de Castaño. Aquella operación relámpago asombró a muchos observadores políticos. Sorprendía sobre todo el hecho de que hubiera sido efectuada en Córdoba, territorio considerado completamente sumiso a Castaño. Paradójicamente, aquella región en la que funcionaba la pax paramilitar, con las organizaciones sociales liquidadas y la guerrilla obligada a actuar lejos de los centros urbanos, era la más indicada para una iniciativa de aquel género. El monstruo había ya cumplido su misión hasta el fondo, y comenzaba a resultar incómodo. Debía ser, por ello, mermado.

Donde todavía quedaba tarea por desarrollar, se le dejaba campo libre. El ejemplo más evidente se dio en la serranía de San Lucas, el macizo montañoso frente a Barrancabermeja en Sur Bolívar, donde debían efectuarse las conversaciones de paz con el ELN, según los acuerdos.¹³ En los primeros meses de 2001, el ejército invadió la zona en plan provocador. Cuando Pastrana ordenó a los militares retirarse, intervinieron con fuerza los paras, obligando a los habitantes de la región a bloquear la carretera que une Bogotá con la costa del Caribe Oriental, para protestar contra la hipótesis de desmilitarización de la zona. “No nos someteremos a presiones”, dijo Pastrana. Pero él no podía desalojar a los manifestantes y combatir a las AUC. “El apoyo del ejército a los planes de paz del presidente Pastrana será medido por si confrontan o no a los paras en esa zona”, escribió un articulista del *Washington Post*. Suponía la fatídica prueba del 9 para el presidente. Bastaron pocos días para comprender que no podría superarla.¹⁴

En aquella ocasión, Alfredo Molano comparó a los militares colombianos con el mayordomo, interpretado por Dick Bogarde, en la película *El Siervo*, de Joseph Losey, “que maneja al patrón, le administra sus bienes y le da órdenes, salvo a la hora del té, cuando llegan las visitas, y se muestra obediente para que la desvalorización de su víctima no le afecte”.¹⁵ Al no poder criticar a las Fuerzas Armadas, el ministro del Interior, Armando Estrada, la tomó patéticamente con Carlos Castaño, quien había dicho en un principio que “no iba a interferir en el proceso de paz”.

13. Sobre la batalla en pro y en contra de la desmilitarización de Bolívar, véase *El Espectador*, 12 de abril de 2001; *El Tiempo*, 17 de abril de 2001.

14. La declaración del *Washington Post* es citada en *El Tiempo*, 22 de abril de 2001.

15. *El Espectador*, 22 de abril de 2001.

Después de casi tres años de iniciada la ofensiva, Rambo no había instalado su hamaca, como tenía prometido, en la serranía de San Lucas –donde se mantenía atrincherada la guerrilla– pero podía vanagloriarse de haber hecho saltar las negociaciones con el ELN y conquistado casi todos los centros de la región, incluyendo gran parte de los barrios de Barrancabermeja, donde llevaba a cabo impunemente la eliminación sistemática de los sindicalistas de la USO y de los líderes de la comunidad. Mientras las AUC imponían su “manual de convivencia” en la ciudad, regulando los horarios de las tiendas, la recogida de basuras y hasta los juegos de azar y el uso de la minifalda, el Estado central se desacreditaba cada día más. El 12 de junio, por ejemplo, la población del puerto petrolero asistió a la entrega de cien ataúdes, por parte del Ministerio del Interior, junto con algunas toneladas de alimentos y de ropa. Un regalo ciertamente útil teniendo en cuenta los 3000 homicidios acaecidos durante los tres últimos años en su ciudad, que contaba con poco más de 200.000 habitantes. Tenía, desde luego, mucho de macabro. El obispo de Barrancabermeja comentó: “Quiera Dios que no nos vayan a donar sufragios”.¹⁶

La incursión repentina en la región de Córdoba contra los financiadores de los paras se demostró una excepción, no la regla. En todo caso, condujo a un cambio histórico en las AUC. A los pocos días apareció en la Internet una carta telegráfica de dimisión de Carlos Castaño: “Compañeros de causa, somos en las AUC amigos y respetuosos de las instituciones del Estado. Este principio es inviolable. Respétenlo. Renuncio irrevocablemente a mi cargo otorgado por ustedes”.¹⁷ El poder político y la prensa reaccionaron desconcertados. “No quiere hacerle la guerra al Estado y prefiere hacerse a un lado para no terminar como Escobar”, manifestaron algunos articulistas, mientras otros empezaban a sentir nostalgia de Rambo. “Le daba un mínimo de racionalidad a la barbarie”.¹⁸ Castaño había hecho una jugada inteligente y bien articulada. Para librarse de la imagen de capo sanguinario, y proponer un “paramilitarismo de rostro humano” dejó su puesto de mando de las AUC a Salvatore Mancuso, un individuo de 37 años de origen italiano, hijo de un ferroviario de la provincia de Salerno, llegado a Colombia en los años sesenta, y convertido en poco tiempo en importante latifundista.¹⁹ Después de haber estudiado sie-

16. *El Tiempo*, 12 de junio de 2000.

17. La ubicación de las AUC en la internet es: www.colombialibre.org

18. Véanse Los comentarios sobre la dimisión de Castaño, *El Tiempo*, 1º y 4 de junio de 2001.

19. *El Colombiano*, 31 de agosto de 2001.

te semestres de ingeniería civil en la elitista universidad Javeriana de Bogotá, Mancuso había vuelto a casa para ocuparse de las fincas de su propiedad, acrecentadas posteriormente al casarse con una muchacha de origen francés, que pertenecía a una de las familias más poderosas de la zona. Los hermanos Castaño conocieron en 1990 a Mancuso, que había organizado una milicia personal privada, ayudado por la XI Brigada establecida en Montería. En los años siguientes, el ítalo-colombiano hizo cursos de contraguerrilla, aprendiendo a conducir los helicópteros que componían la dotación de los paras. Precisamente con un Black Hawk, Mancuso logró salvar a Carlos Castaño de los guerrilleros de las FARC el 28 de diciembre de 1998 en la finca El Diamante. Sus cualidades militares lo llevaron al mando de las AUC en las regiones atlánticas orientales, donde más fuertes eran los enfrentamientos, sobre todo con el ELN. Pasado a la clandestinidad en 1998, Mancuso comenzó a coleccionar órdenes de captura por homicidio, secuestro y asociación para delinquir, hasta estar vinculado en una gigantesca operación antidroga internacional, que descubrió en enero de 2004 una conexión entre la poderosa organización criminal italiana Ndrangheta Calabria y las AUC.

Cuando Castaño dijo en el 2001: “No respondo por las acciones de Mancuso”, los periódicos especularon sobre la existencia de “dos líneas” en los paras. En realidad, Rambo no hacía sino repetir el guión que el Estado había recitado siempre con los paramilitares. El paso del mando a Mancuso no fue su único gesto. En noviembre de 2001, reunidos los 14 comandantes de la cúpula de las AUC en la IV conferencia nacional, manifestaron su voluntad de “humanizar” el conflicto, poniendo fin a las masacres, desapariciones forzosas, torturas y sevicias. “Si algún bloque o comandante incurre en un hecho como éstos, será única y exclusivamente su responsabilidad y tendrá que responder por él ante el Estado Mayor de las autodefensas”, dijo El Alemán, uno de los más conocidos jefes de las AUC.²⁰ En realidad, el baño de sangre continuó como antes. Unos veinte días más tarde, por ejemplo, 15 pasajeros de un autobús que recorría la orilla de la laguna de Tota, en el departamento de Boyacá, fueron obligados a apearse y luego ametrallados por un grupo de paras, que acusaron a algunas de las víctimas de simpatizar con la guerrilla.

Los periódicos, en todo caso, elogiaron el denominado “giro humanitario” de las AUC. *El Tiempo* escribió que “los paramilitares han demostrado, por lo menos verbalmente, estar más en sintonía que las FARC

²⁰. *El Colombiano*, 17 de noviembre de 2001.

con los cambios en el mundo, y han dado señales claras de que entienden las implicaciones de la nueva coyuntura y su inclusión en la lista de terroristas internacionales”.²¹ El Departamento de Estado norteamericano había incluido a las AUC en abril de 2001 en dicha lista. A pesar de que Washington reconocía que los paras “no atacan directamente contra los intereses de Estados Unidos y de los ciudadanos estadounidenses”, para Castaño suponía un baldón ver a su movimiento confundido, no solamente con las FARC y el ELN, sino además con Al-Qaeda de Bin Laden y con todos los movimientos fundamentalistas islámicos. Rambo era también consciente de hasta qué punto el gobierno de Estados Unidos era sensible ante el tema de la droga, utilizándola, además, como pretexto. Y para ganárselo, jugó todas sus cartas. La primera, de la que no podía vanagloriarse públicamente, era la colaboración que aportaban las AUC en las regiones del sur al Plan Colombia, mediante la “limpieza política” realizada por sus bloques de dicha zona. Castaño continuaba, asimismo, haciendo de intermediador entre la DEA y los narcos, en particular ante los hermanos Rodríguez Orejuela, capos del desmantelado cartel de Cali, dispuestos a pactar sus condenas en los tribunales estadounidenses. Según el periódico *New Herald*, las AUC habían sido recompensadas con varios suministros de armas por la tenebrosa colaboración con la DEA, que arrancaba de los tiempos de caza a Escobar.²²

A Castaño se le tenía previsto un premio en efectivo. Parte del dinero obtenido con la rendición de 114 narcotraficantes a la justicia norteamericana iría a los paramilitares: así fue decidido durante las reuniones celebradas entre noviembre de 1990 y febrero de 2000 en Panamá por hombres de los organismos antinarcóticos de Estados Unidos y los narcos, según el abogado Baruch Vega, que entonces actuaba de intermediario. “Esto fue llevado a cabo como en el caso Irán-Contras, que sirvió para financiar operaciones secretas con el dinero del narcotráfico. Allí se quería eliminar una cosa, y acá darle ayuda al paramilitarismo”, reveló Baruch Vega al periodista Fabio Castillo.²³

Dado que a esas alturas resultaba evidente la implicación de las AUC en el comercio de droga, Castaño comenzó a recitar en 2002 el guión de luchador integérrimo. Reconociendo que “la corrupción originada por el narcotráfico ha llevado a las Autodefensas a una situación crítica”, y

21. *El Tiempo*, 7 de diciembre de 2001.

22. *New Herald*, 10 de agosto de 2000, 24 de marzo de 2001 y 15 de marzo de 2002.

23. *El Espectador*, 1 de diciembre de 2002.

que las costas colombianas, y en particular el golfo de Urabá (que estaban bajo el dominio casi exclusivo de las AUC) eran utilizadas para embarcar droga, Rambo amenazó con denunciar a los narcos ante las autoridades y considerarlos “objetivos militares” de sus hombres. En el afán de limpiar su propia imagen, fingió disolver las AUC el 12 de julio, anunciando la vuelta a su feudo, tomando de nuevo el mando, junto a su fidelísimo Mancuso, de las Autodefensas de Córdoba y Urabá (ACCU) que suponían el 70% de la organización paramilitar. “No podemos convertirnos en un refugio de bandidos”, dijo Castaño cuando decretó la expulsión de algunos grupos, como el de Tolima y el de Casanare. Su show duró poco. En sendas cartas enviadas los primeros días de septiembre al secretario general de la ONU, Kofi Annan, a la embajadora estadounidense, Anne Patterson, y al cardenal Pedro Rubiano, informó que las AUC se habían reunificado.²⁴ El encuentro mantenido por 18 jefes militares, que había tenido lugar durante cinco días en las montañas de Urabá, concluyó con el enésimo compromiso solemne: “Cualquier miembro de las AUC que resultara involucrado en las actividades del narcotráfico, en sus etapas de procesamiento, embarque o exportación, será denunciado públicamente por nosotros”. Quedaron excluidos el Bloque Central Bolívar y un grupo que actuaba en el Meta, responsable de varios secuestros de latifundistas y, por el contrario, se ratificó la paz con el Bloque de Santa Marta, dirigido por Hernán Giraldo, a quien Castaño había conocido en los años ochenta en Puerto Boyacá, junto a Escobar y Rodríguez Gacha, y que era uno de los ejecutores de las matanzas de Honduras y La Negra de 1988. La de Giraldo era la única verdadera oposición interna de Rambo. Surgida a causa del asesinato por parte de los hombres del jefe de Santa Marta de dos agentes de la DEA, la guerra había producido unos 70 muertos, concluyendo en febrero de 2002 con un pacto de no agresión.

Castaño intentaba, por una parte, evitar un final como el de Pablo Escobar o Antonio Noriega tendiendo la mano a la DEA y al gobierno de Estados Unidos, “las apariciones públicas de Castaño desde 1995 han tenido el propósito de buscar su legitimación política”, según el ex coronel Carlos Alfonso Velásquez.²⁵ Rambo esperaba imitar al salvadoreño Roberto D’Aubuisson, capaz de pasar en poco tiempo de capo de los escuadrones de la muerte a figura institucional de primera plana en el país centroamericano.

24. *El Espectador*, 8 septiembre de 2002.

25. *El Tiempo*, 17 julio de 2002.

En septiembre de 2001 las AUC anunciaron la constitución del Movimiento Nacional Democrático (MND). “Hemos hecho pie en la otra orilla, la de la política. Nacimos para la guerra para acabar con la guerra, confluimos en la política para dignificar la política y hacer posible la paz”.²⁶ Castaño añadió: “no volveremos a hablar *sottovoce* con gobierno alguno, nuestros diálogos tienen que ser públicos, de cara al país y por encima de la prepotencia subversiva. No aceptaremos tratos discriminados, una guerrilla y una antiguerrilla sólo pueden ser la misma cosa”. Con él concordaban sectores cada vez más significativos de la sociedad colombiana. También había muchos políticos, sobre todo del Partido Liberal, que eran partidarios del “diálogo a tres”, y a ellos se unió monseñor Alberto Giraldo, presidente de la Comisión Episcopal Colombiana, quien afirmó que en “una situación como la que tenemos en este momento, de alguna manera todos los actores del conflicto deben entrar en diálogo en mesas diferentes”. El influyente periódico *El Tiempo* escribió: “No parece coherente que el Estado colombiano negocie con quienes han buscado su derrocamiento y se abstenga de hacerlo con los que no lo atacan”. Idéntica opinión tenían en Washington. El secretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Otto Reich, no tenía dudas. “Creemos que todos los grupos terroristas deben participar en el diálogo”.²⁷

Entre las pocas voces discordantes se encontraba la del consejero especial de la ONU para el proceso de paz colombiano, James Lemoyne, quien afirmó en enero de 2002 que las AUC no podían ser consideradas un “interlocutor político legítimo” por “la táctica que, hasta ahora ha sido puramente, no de forma total, pero sí en muchos aspectos, de ataques contra la población”. Eran, sin embargo, consideraciones que dejaban indiferentes a los políticos y representantes de la oligarquía, a quienes siempre había importado muy poco la suerte de la población rural sometida a la violencia más brutal.

El papel y el proyecto político de Castaño se reforzaron tras el fracaso de las negociaciones del Caguán. Su estrategia antisubversiva y sus métodos sanguinarios resultaron vencedores de nuevo, frente a la incapacidad evidente del Estado para llegar a la paz con la guerrilla sin costo ni sacrificio alguno para la clase dominante, así como de vencer una guerra utilizando únicamente el ejército regular. Unos días después de recu-

26. *El Tiempo*, 5 septiembre de 2001.

27. Véanse las afirmaciones de monseñor Giraldo y de Otto Reich en *El Tiempo*, 3 de noviembre de 2000 y 29 de mayo de 2002.

perar la zona desmilitarizada, el general Gustavo Porras, comandante de la XII Brigada estacionada en la región del Caguán, dimitió ante los escasos resultados obtenidos precisamente por la Operación Tánatos, afirmando que para vencer la guerra “se necesita armar un millón de civiles”. Ese mismo día se conoció un documento de 70 páginas, de la Escuela de Guerra de Estados Unidos, según el cual “el problema contrainsurgente de Colombia radica en que los ciudadanos no están involucrados en la guerra. Bogotá, en vez de resolverlo directamente como lo han hecho todos los que sufren guerras internas, es decir, movilizándolo y organizándolo al pueblo para que sea su auxiliador en la antiinsurgencia, ha recargado todo el trabajo sobre el ejército”.²⁸

La afirmación del paramilitarismo derivaba asimismo de una sociedad extenuada por una barbarie en expansión. Castaño se había convertido, gracias al trabajo propagandístico de quienes lo apoyaban de forma manifiesta u oculta, en el líder de un bloque económico, político, social y cultural que crecía. Ser para no significaba ya la adhesión a su movimiento, sino asimismo un canon de conducta autoritaria que preveía la solución violenta –no necesariamente con ametralladoras y machetes– de toda actitud problemática, desde la del ladrón de barrio o del mendigo insistente hasta la del trabajador sindicalizado y el oponente político, y puede que hasta del rival en el amor. Fuera de los núcleos de las grandes ciudades, Colombia tenía ya la imagen de un país fragmentado y disputado por las bandas armadas, comprendida la estatal, con uniformes y hasta con estilos de conducta cada vez más semejantes. Se combatía sin respetar frentes ni normas, haciendo blanco, ante todo, en la población indefensa. Cada comunidad se veía inducida, por ello, a garantizarse su seguridad utilizando el único instrumento eficaz, es decir, las armas. Una vez puesto en marcha y alimentado, el proceso de privatización y de recrudescimiento de la guerra funcionaba de manera autónoma. Castaño, que era su principal producto y artífice, resultaba su natural y gran beneficiario político.

La primera confirmación se dio en las elecciones parlamentarias de marzo de 2002, que tuvieron lugar pocas semanas después del fin de las ilusiones que representaba el Caguán, y que premió las listas independientes, además de asestar un duro golpe a la maquinaria burocrática de los dos partidos tradicionales. En algunas de ellas había conocidos sindicalistas, activistas de los derechos humanos y algún comunista que había sobrevivido a las balas. En otros triunfaron figuras más o menos desco-

28. Véanse las afirmaciones del general Porras y de la Escuela de guerra de Estados Unidos en *El Tiempo*, 1, 3 y 4 de marzo de 2002.

nocidas de la capital y de la costa atlántica, que Salvatore Mancuso señaló como representantes políticos de los paramilitares. “La meta original del 35% ha sido largamente superada y constituye un hito en la historia de las AUC”.²⁹ Entre ellos se encontraban, naturalmente, algunos diputados del llamado autosequestro de noviembre de 2000.

Pero la consagración de la ideología paramilitar se produjo en las elecciones presidenciales dos meses más tarde, con la victoria del candidato liberal independiente, Álvaro Uribe Vélez. Su victoria se había visto favorecida por la crisis de los dos partidos tradicionales, el fracaso de las negociaciones de paz (a las que Uribe se había opuesto frontalmente siempre), y asimismo por la ofensiva realizada por la guerrilla en vísperas de las elecciones. “Podría decirse que si las FARC hace cuatro años con gran habilidad política, contribuyeron a llevar a la presidencia a Andrés Pastrana Arango, en esta oportunidad, con reiterada torpeza, han facilitado los argumentos para la elección de Álvaro Uribe a la presidencia”, escribió Luis Guillermo Pérez Casas, el abogado forzado al exilio después de heredar muchas de las causas llevadas por Eduardo Umaña. La perspectiva de la presidencia de Uribe desataba sentimientos contradictorios. Citando al poeta nadaísta colombiano Gonzalo Arango (“Usted promete una felicidad que mata pero no da resurrección”), la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, manifestó en una carta pública que sentía miedo ante esa posibilidad. En el espacio de la Internet de los paras, Carlos Castaño afirmó que Uribe habría “favorecido a la gran mayoría de los colombianos y, entre ellos, a la base social de las AUC”. El currículum del candidato no dejaba dudas al respecto. Los pocos periodistas que se atrevieron a levantar algunos episodios oscuros de su vida pagaron cara su valentía.³⁰

Laureado en leyes e introducido con sólo 24 años en el *staff* que dirigía la Administración de Medellín, Uribe había sido uno de los firmantes de las leyes destinadas a dismantelar los ya exigüos derechos de los trabajadores. Amigo de la familia Ochoa, el mayor clan de mafiosos del país, Uribe no había escatimado favores a los narcos, a decir de varios comentaristas. En los pocos meses que ocupó la alcaldía de Medellín, había promocionado los “proyectos sociales” de Pablo Escobar. En calidad de director de la Aeronáutica Civil, había entregado patentes de vuelo a mu-

29. *El Tiempo*, 12 de marzo de 2002.

30. Tres de ellos, Fernando Garavito, articulista del *El Espectador*; Daniel Coronel, director de Noticias Uno, y Gonzalo Guillén, corresponsal del *New Herald de Miami* se vieron obligados a exiliarse, tras varias amenazas de muerte. El 2 de diciembre de 2002 la dirección del *El Espectador* suspendía la rúbrica de Garavito.

chos pilotos contratados por los carteles de la mafia, y permitido la construcción de pistas privadas utilizadas por ellos. Como diputado, se había manifestado en 1989 en contra de la ley de extradición, verdadero fantasma de los capos mafiosos. La implicación directa de su familia en el narcotráfico resultó evidente en 1984, cuando la policía, que había descubierto el gigantesco complejo de refinado de cocaína, llamado Tranquilandia, halló, entre otras cosas, un helicóptero propiedad de su padre Alberto. Ninguna autoridad colombiana creyó conveniente profundizar en el hecho, prefiriendo apoyar, a partir de entonces, la teoría de la “narcoguerrilla”.³¹ Los gringos seguían sus pasos. Según las revelaciones de la revista *Newsweek* en agosto de 2004, la Agencia de Inteligencia del Pentágono lo consideraba en 1991 uno de los cien colombianos más peligrosos afirmando que Álvaro Uribe “tenía en ese entonces relaciones con el narcotráfico y el cartel de Medellín». Lo que más preocupó a los colombianos durante la campaña electoral de 2002 fue, en todo caso, su relación con los métodos y los protagonistas de la guerra sucia. En 1982, por ejemplo, Uribe había traspasado su hacienda La Mundial a los 76 dependientes que trabajaban en el cultivo de la caña de azúcar, para resarcirlos de los sueldos y cuotas sociales jamás abonados. Los dirigentes pagaron caro aquel acuerdo, firmado tras cinco años de duras luchas. Uno tras otro fueron asesinados o hechos desaparecer. Según los autores del informe “Nunca más”, otras fincas de su familia, como La Manada y Las Guacharacas, habían sido utilizadas como base de grupos paramilitares. Cuando en 1995 llegó a gobernador de Antioquia, Uribe declaró la región “Zona especial de orden público”, asignando poderes especiales a las Fuerzas Armadas, y promoviendo la formación de unas 70 Convivir, que contribuyeron activamente en el exterminio de la oposición política y social, hasta el punto de que, al concluir su mandato, la región había pasado casi totalmente bajo el control de las AUC. Uribe no negó nunca su solidaridad con los oficiales acusados de violar los derechos humanos. En 1999, durante una ceremonia organizada en un hotel de Bogotá, pronunció un discurso defendiendo al general Del Río, suspendido hacía poco de servicio por haber favorecido la actividad de las AUC en Urabá.

En su descarnado programa electoral, Uribe se apartó de la teoría clásica del monopolio estatal de la violencia para proponer el reclutamiento, junto a las Fuerzas Armadas, de un millón de colombianos “para la prevención del delito y la promoción de la vida comunitaria”, a quienes dotaría de radioteléfono y de armas genéricamente definidas como “de-

31. *El Tiempo*, 23 de abril de 2002, y *Newsweek*, 2 de agosto de 2004.

fensivas". Según Uribe, centenares de miles de conductores de autobús y de taxi, además de campesinos de las regiones más desperdigadas del país y las "personas de bien" de las ciudades, deberían convertirse en "ojos y oídos del Estado" Uribe prometía orden, autoridad y guerra a la corrupción. Su consigna "Mano fuerte, corazón grande", impactó al 24% de los colombianos con derecho a voto, que acudieron a las urnas el 26 de mayo de 2002, desafiando la apatía, el escepticismo y el boicot ritual de la guerrilla. El porcentaje le permitió, en todo caso, ser elegido presidente en la primera vuelta, dejando lejos al candidato oficial del Partido Liberal, el ex ministro Horacio Serpa y, todavía más, al socialdemócrata Luis Eduardo Garzón. Los primeros en felicitar a Uribe fueron sus aliados militares, escondidos u ocultos. Salvatore Mancuso declaró en el espacio web de las AUC: "Se ha elegido a conciencia a un digno presidente para una Patria que quiere pacificarse y crecer solidariamente".³² La embajadora de Estados Unidos en Bogotá, Anne Patterson, para felicitarlo llegó a romper incluso el protocolo, que imponía esperar a la proclamación del resultado oficial. Los periódicos norteamericanos subrayaron la total sintonía de Uribe con la Casa Blanca. El *Wall Street Journal* dio al nuevo presidente el sobrenombre de George W. Uribe, el *Dallas Morning News* escribió que "Colombia ha elegido a su Ariel Sharon". En el país, parte de la opinión pública pareció caer de pronto en cuenta de la elección que acababa de hacer. Mientras Ana Teresa Bernal, responsable de Redepaz, la coordinadora más importante para la paz, afirmaba "que la gente en las grandes ciudades ve la violencia por televisión y apuesta por la guerra",³³ una encuesta realizada en las cinco mayores ciudades reveló que el 65% de los colombianos pedía a Uribe que excluyese la solución de fuerza y optara decididamente por la vuelta a las negociaciones con la guerrilla.³⁴ Pero ya era tarde.

Las FARC demostraron que aceptaban el desafío de Uribe, acogiendo la toma de posesión de su cargo, el 7 de agosto de 2002, con una ráfaga de cohetes y granadas dirigidas contra el palacio presidencial. La demostración de fuerza se transformó en una imperdonable masacre, con la muerte y mutilación de decenas de indigentes de la miserable calle del Cartucho (que distaba al menos 800 metros del palacio) causada, según la fría terminología técnica, por "el cambio de dirección de una carga explosiva".³⁵

32. Agencia Efe, 26 de mayo de 2002.

33. *El Colombiano*, 19 de junio de 2002.

34. *El Tiempo*, 24 de junio de 2002.

35. www.redresistencia.org, 8 agosto de 2002.

Obedeciendo la invitación de la embajadora Patterson, Uribe llamó a 40.000 reservistas. Después anunció que, durante su mandato, deseaba aumentar la plantilla de las Fuerzas Armadas de 240.000 a 400.000. Suspensión de los permisos militares durante varios meses y comenzó a concretar su idea de enrolar a “un millón de colombianos”, reclutando 20.000 jóvenes campesinos para la defensa de 500 poblaciones que no contaban con una presencia militar significativa. Aunque los nuevos ministros y los generales juraron que no querían repetir las sangrientas experiencias de las “rondas campesinas” peruanas y guatemaltecas, ni tampoco dar nueva vida a las Convivir, el camino hacia la generalización de la guerra civil estaba abierto. Y todo hacía pensar que iba a desatarse una guerra todavía más insensata y bárbara que las sufridas hasta entonces por el país. A pesar de expresar cierta perplejidad en sus editoriales, los grandes periódicos nacionales aceptaron el giro autoritario, apoyando mediante artículos y encuestas la “red de informantes”, que constituía la niña de los ojos de la estrategia político-militar de Uribe. Los resultados fueron trágicómicos. Al requerimiento de que explicara cómo podría reconocer a una persona sospechosa, uno de los primeros campesinos reclutados en la región del Cesar respondió:

Yo tengo un don para analizar a la gente. Le miro directo a los ojos. Si me rehúye es que algo esconde... Si un tipo se viste como pigua [campesino], no sabe combinar la ropa, se pone una camisa roja con verde... y tiene rasguños en los brazos ahí mismito le analizo la cintura porque puede ser guerrillero...³⁶

Desde el Palacio de Nariño se abrieron las puertas a las AUC. “Hay que ser realistas, existen, y por lo tanto hay que trabajar para desarmar a cualquiera que tenga un arma ilegal”, dijo el presidente Uribe, apenas tomó posesión de su cargo.³⁷ Castaño respondió inmediata y debidamente, declarándose disponible para un proceso de desarme “inmediato o cuando el gobierno lo requiera”. En su comunicado, el capo de los paras subrayó asimismo que “es inocultable la contención que hemos representado para las intenciones totalitarias de la subversión. Sin la participación de la antsubversión civil, las guerrillas andarían cerca de tomarse el poder”.³⁸

En el momento de pasar por caja, Rambo recordaba, con poca elegancia, la eficacia del “sistema del pájaro”.

36. *El Tiempo*, 19 de agosto de 2002.

37. *Semana*, 11 agosto de 2002.

38. *El Espectador*, 14 de agosto de 2002.